

Santiago, nueve de noviembre de dos mil veintitrés.

Visto:

En estos autos RIT N° 89-2023, RUC 2100977303-4, por sentencia de veinte de septiembre del año en curso, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, condenó a Vladimir Alexis Elgueta Valdebenito, Francisco Alejandro Huerta Barrientos y Rene Patricio Ramos Flores a la pena única de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales, como autores de tres delitos de robo con fuerza en lugar habitado, perpetrados el día 29 de octubre de 2021, en la comuna de Vitacura.

En contra del referido fallo el abogado don Adolfo Ignacio Miranda Urzúa, defensor privado, por los sentenciados dedujo recursos de nulidad, el que fundó de manera principal en la causal contenida en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 342 letra c) y 297 del mismo cuerpo legal y en subsidio en la del artículo 374 letra f) del referido código, por lo que solicitó se anule la sentencia impugnada y el juicio que le precedió y se establezca el estado en que ha de quedar éste.

El recurso fue declarado admisible y se procedió a su vista en la audiencia del día 31 de octubre del presente, oportunidad en la que alegó el abogado defensor, quien se desistió de la causal subsidiaria, y el representante del Ministerio Público, fijándose como fecha para lectura de la sentencia la del día de hoy.

Oído los intervinientes y considerando:

Primero: Que, la causal subsistente se asila en la de nulidad absoluta contenida en el literal e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en relación con lo dispuesto en los artículos 342 letra c) y 297, del mismo compendio normativo, aduce la defensa que las sentenciadoras al valorar la prueba rendida en juicio no se ajustaron a las reglas de la lógica, en particular a lo que dice relación con el principio de razón suficiente y no contradicción.

Estima que el razonamiento octavo de la sentencia recurrida señala que *“Respecto a la negativa de los acusados de participación en el robo a otras casas, no fueron creídos porque existen graves indicios que los incriminan, en primer término, porque fue probado de manera inconcusa que el día 29 de octubre de 2021, además de la casa I,*



también fueron afectados por el robo otras propiedades, que las tres casas se encontraban al interior del mismo condominio y se encontraban próximas unas de otras, que las especies fueron halladas instantes después que se produjo la huida de los bandidos, luego de que se activara la alarma de una de las casas afectada, de tal manera que el cúmulo de antecedentes ciertos aportan al entendimiento de una presunción judicial, que sumada a las imágenes captadas por las cámaras y las escuchas telefónicas forman el convencimiento de participación de los acusados Francisco Huerta Barrientos y Vladimir Elgueta Valdebenito, los que fueron detenidos en virtud de una orden judicial días después.”

Refiere que en el extracto aludido es patente que los jueces del grado vulnera los principios de la lógica de no contradicción y razón suficiente, al dar por acreditada la participación de los encausados en el robo con fuerza en lugar habitado en los 3 domicilios afectados de ese condominio en particular teniendo como base de una presunción judicial elementos tales como el hallazgo de especies provenientes de los domicilios afectados, en lo particular se vulnera el principio de no contradicción toda vez que la prueba de cargo acredita que respecto a la casa M la única especie sustraída no fue hallada, de lo cual da cuenta el considerando sexto de que el testigo Juan Pablo Fernández Pérez, víctima de la casa M, indica que lo único sustraído fue una conexión de aspiradora robot, especie que no recuperó, por lo que no pueden ser ciertas ambas proposiciones fácticas, ya que son efectivamente contradictorias.

En lo que concierne a la casa L, señala que se vulnera el principio de razón suficiente, toda vez que la prueba de cargo a través del testigo Jaime Bulnes, víctima de la casa L, indica que recibe mensajes de vecinos alertando del robo y que reconoce en las fotografías del grupo especies provenientes de su domicilio entre las encontradas sin indicar donde fueron halladas, ni quien las encontró, en este punto específico lo cierto es que la prueba de cargo no indica en qué lugar se encontraron dichas especies, por lo anterior, se vulnera el principio de la razón suficiente puesto que no existe razón suficiente para sostener que estas especies fueron halladas en el camino de huida

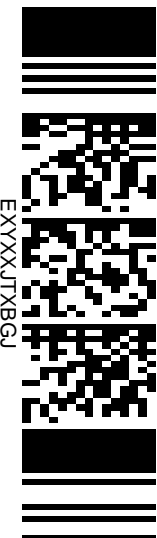


de los acusados y no fueron halladas en otro lugar dentro del mismo condominio.

Solicita que se declare la nulidad de la sentencia y de la audiencia de juicio oral, determinando el estado en que hubiere de quedar el procedimiento.

Segundo: Que, en lo que dice relación con la alegación levantada por la defensa del condenado, a fin de dirimir lo planteado, es menester estarse a lo asentado por el tribunal de la instancia al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, efectúe una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado, porque ello quebranta de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y valoración de la prueba en este sistema procesal penal, ya que implicaría que este tribunal de nulidad, únicamente de la reproducción parcial de los testimonios rendidos en el juicio, podría dar por acreditados hechos distintos y opuestos a los que los magistrados extrajeron de esas deposiciones, no obstante que estos últimos apreciaron íntegra y directamente su rendición, incluso el examen y contraexamen de los contendientes, así como hicieron las consultas necesarias para aclarar sus dudas, lo que de aceptarse, simplemente transformaría a esta magistratura, en lo atinente a los hechos en que se construye esta causal de nulidad, en un tribunal de segunda instancia, lo cual, huelga explicar, resulta inaceptable.

Que ahora bien, conviene recordar que en lo tocante a la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, la Corte Suprema, ha señalado que toda sentencia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, justificar la decisión adoptada, fijar los hechos y establecer el derecho aplicable. El cumplimiento de la obligación de motivación de la decisión significa elaborar una justificación específica de la opción consistente en tener algunos hechos como probados, sobre la base de los elementos de prueba obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral. Tal deber apunta no sólo a permitir la comprensión de la decisión, sino además a garantizar

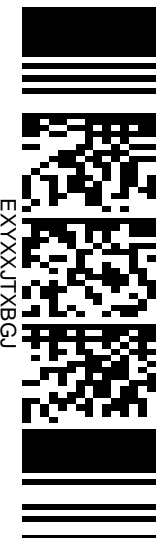


la actuación racional en el terreno de la determinación de las premisas fácticas del fallo.

La satisfacción de esta carga posibilita la fiscalización de la actividad jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el ejercicio de los recursos procesales. Si el tribunal explica las razones de su resolución es posible controlar si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, es el resultado de la arbitrariedad. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto de simples impresiones de los jueces, sino que deben ser el corolario de la estimación racional de las probanzas, exteriorizada como una explicación igualmente racional sobre la justificación de la decisión de una determinada manera -y no de otra-, explicación que deberá ser comprensible por cualquier tercero, mediante el uso de la razón.

Así, la salvaguardia esencial del derecho a una sentencia fundada y motivada encuentra consagración en el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, que impone a los sentenciadores la obligación de exponer de manera clara, lógica y completa, cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del mismo ordenamiento. Tal disposición establece un sistema de libertad en la valoración de la prueba, el que sólo reconoce como límites los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. De esta manera, el proceso de clausura de un procedimiento legalmente tramitado lo constituye una sentencia que se ciñe a los parámetros citados.

Tercero: Que se desprende de la simple enunciación de estos preceptos que nuestra legislación procesal penal ha sido especialmente exigente en orden a imponer a los jueces un trabajo de elaboración metódico y cuidadoso en la concepción de sus fallos. La preocupación esencial de toda sentencia penal de fijar los hechos y circunstancias que se tuvieron por probadas, favorables o desfavorables al acusado, debe ir



precedida de la debida valoración que impone el artículo 297 del cuerpo de leyes ya citado.

Al efecto, la Corte Suprema ha declarado que el fin de la fundamentación que exige la norma que sustenta el recurso por la causal que se analiza no es otro que permitir la reproducción y fijación del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llega la sentencia, carga que se ve reforzada por lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 36, aplicable en la especie por ser común a todo tipo de resoluciones dictadas en el juicio oral, que declara que la simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirá en caso alguno aquella debida fundamentación, debiendo entonces dar cuenta de lo escuchado en audiencia y, en base a ello, razonar conforme a las normas de la dialéctica a fin de evidenciar las motivaciones que se han tenido en cuenta para preferir un medio respecto del otro o para darle preeminencia, de modo que de dicho análisis fluya la constancia de cómo hicieron uso de la libertad para apreciar la prueba y llegaron a dar por acreditados los acontecimientos y circunstancias que serán inamovibles posteriormente (SCS N° 3873-2011, entre otras). Lo anterior evidencia, en concepto de Daniela Accatino, la opción de nuestro sistema procesal penal por un modelo analítico de fundamentación del juicio de hecho (“El modelo legal de justificación de los enunciados probatorios en las sentencias penales y su control a través del recurso de nulidad”, en “Formación y Valoración de la Prueba en el Proceso Penal”, Abeledo Perrot, 2010, p.122).

Estas exigencias no están desprovistas del correspondiente respaldo constitucional, ya que el inciso 6° del numeral tercero del artículo 19 de la Constitución Política de la República declara que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”, por lo que las señaladas normas reglamentan la forma cómo los jueces deben dar por acreditados los hechos y, si no son respetadas, permite la anulación correspondiente.

Cuarto: Que los fundamentos que los sentenciadores tuvieron en consideración para la determinación de los hechos se encuentran



desarrollados latamente en los motivos sexto, en que analiza la prueba de cargo y séptimo en que efectúa la valoración de las probanzas rendidas, explica detalladamente cómo ocurrieron los hechos, para dar por establecido “*Que la prueba valorada en los términos que se ha indicado permitió establecer que el día 29 de octubre de 2021, a eso de las 22:30 horas, los acusados Francisco Huerta Barrientos, Vladimir Elgueta Valdebenito y René Ramos Flores concurrieron hasta un condominio ubicado en el sector de Avenida Lo Recabarren, comuna de Vitacura, ingresaron a la casa i, de propiedad de don Jorge Guillermo Fabres Briggs, escalaron el muro del cierre perimetral, ingresando al interior del inmueble, donde fracturan el ventanal del dormitorio principal, sustrayendo diversas especies, tales como joyas y dos cámaras fotográficas, avaluado todo en \$ 20.000.000 de pesos; también la casa M comuna de Vitacura, de propiedad de Juan Pablo Fernández Pérez, para una vez en el interior, forzaron una de las ventanas sustrayendo diversas especies, como una pieza de una aspiradora robot; asimismo, ingresar a la casa L de propiedad de la víctima Jaime Sebastián Bulnes Ríos lugar donde fracturan uno de los ventanales y sustrajeron diversas especies, tales como joyas, llaves de auto, cámaras fotográficas, notebook, un arma de reliquia no apta para el disparo, dinero en efectivo y dólares, todo avaluado en la suma de \$ 15.000.000 de pesos, activándose la alarma, dándose a la fuga en distintas direcciones, siendo detenidos en las cercanías Ramos Flores, en tanto que Francisco Huerta Barrientos y Vladimir Elgueta Valdebenito, quedaron escondidos en el sector, para posteriormente huir del lugar.”.*

Se revela toda la secuencia y por qué resultan concordantes y coincidentes las versiones de los aprehensores declaran en el juicio, razonando adecuada y suficientemente por qué tienen por acreditado los delitos y la participación de los sentenciados en los supuestos fácticos que se les imputan, haciéndose cargo además de los cuestionamientos efectuados por la defensa, en relación con la prueba de cargo.

Quinto: Que el tribunal aborda en el basamento noveno de manera clara y detallada la participación de cada uno de los imputados en los delitos por los que fueron condenados.



En este sentido conviene destacar que el tribunal, a propósito de ello indicó, entre otras consideraciones que: *“En cuanto a la participación de los acusados Huerta Barrientos, Vladimir Elgueta y René Ramos en los tres delitos de robo en lugar habitado, fue establecida mediante las imágenes fotográficas y las escuchas telefónicas que fueron reproducidas en audiencia y explicadas por el policía Carlos Romero Painem, especialmente en las pistas 4, 11, 12 y 13 Francisco Huerta en día de los hechos, horas después se comunica con su pareja Tamara y le pide auxilio, dándole a entender que está escondido en un sector de Lo Curro, que lo vaya a buscar, asimismo, las escuchas, particularmente los audios 10 y 13 se hace referencia a Vladi, que corresponde a Vladimir Elgueta, junto a otros sujetos vinculado a un robo, y que huían, además se vinculada a miembros de la banda que estaba siendo investigado meses antes por su participación en otros robos,*

Además, fueron considerados los dichos de los propios acusados Francisco Huerta Barrientos, Vladimir Elgueta Valdebenito y René Ramos Flores, que reconocieron su participación en el delito de robo que afectó a Jorge Fabres de la casa I, reconociendo que ese día se trasladaron hasta la comuna de Vitacura con el objeto de ingresar a una casa y sustraer especies, pero que una vez que sonó la alarma huyeron del lugar abandonando las especies, negando haber ingresado a robar a otros domicilios ese día”.

En suma, para el tribunal fue posible establecer que los sentenciados eran parte de una banda que se dedicaba al robo de casas, convicción a la arribó luego de los propios encartados reconocieran que ingresaron a una de las viviendas afectadas, cuestión que los lleva a concluir que participaron en los tres robos, pues ellos mismos se sitúan en el lugar de comisión de los ilícitos, a lo que se suma que se trata de un condominio de manera que una vez que ya estaban en su interior, eligieron las propiedades a las que ingresar, huyendo porque se activó la alarma de una vivienda.

De este modo, la participación de los imputados en los tres delitos está debidamente acreditada, toda vez que la dinámica de los hechos fue adecuadamente reconstruida por el ente persecutor, que contaba, además, con las cámaras de seguridad en las que se logra ver



a tres individuos que huían del condominio la noche de ocurrencia de los hechos.

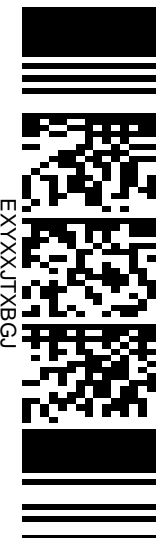
Sexto: Que, entonces, de lo antes expuesto no se advierte la infracción que se denuncia por el recurso, desde que la valoración de la prueba de cargo se ha realizado conforme a la facultad privativa y soberana de los jueces de la instancia, de acuerdo a los estándares que contempla el artículo 297 del Código Procesal Penal, esto es, en lo que hace al principio cuestionado, la motivación fáctica establecida deriva de inferencias razonables, deducidas de pruebas válidas y de la sucesión de datos extraídos de la misma, coherente -además- con las demás pruebas aportadas al juicio.

Séptimo: Que, además, del examen atento del fallo se tiene que contiene una exposición clara y completa de los hechos que se dieron por probados tanto en lo que dice relación con la existencia del hecho punible cuanto en lo relativo a la participación de los acusados; la valoración de los distintos medios de prueba aportados al juicio, como antes se dijo; la calificación de los hechos establecidos y se hizo cargo el tribunal, además, de las alegaciones de la defensa, dando las adecuadas razones para desestimarla. Así, se arribó a la decisión condenatoria la que, en consecuencia, aparece revestida del correspondiente marco fáctico y jurídico.

Octavo: Que es así entonces la defensa sólo plantea discrepancias con la conclusión a que arriban los jueces, conforme la justificación de su razonamiento, y que contiene similares argumentos a los de su teoría del caso, esgrimidos en el desarrollo del juicio oral, y que fueron desacreditados por la sentencia, conforme el conjunto de la prueba que se rindió en el juicio.

Noveno: Que, conforme a lo expuesto anteriormente, solo cabe desestimar el recurso de nulidad en estudio.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza el recurso de nulidad** deducido por el abogado defensor penal privado don Adolfo Ignacio Miranda Urzúa en contra de la sentencia dictada el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa RIT 89-2023, RUC 2100977303-4, del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, la que en consecuencia no es nula.

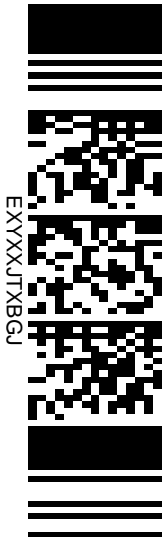


Regístrese, comuníquese y devuélvase la competencia.

Redactó la ministra señora Paola Danai Hasbún Mancilla.

Rol N° 5104-2023.

Pronunciada por la **Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por la ministra señora Maritza Villadangos Frankovich e integrada, además, la ministra señora Paola Danai Hasbún Mancilla y el abogado integrante señor Eduardo Jequier Lehuedé. No firman la ministra señora Paola Danai Hasbún Mancilla y el abogado integrante señor Jequier, por no encontrarse al momento de hacerlo.



Proveído por la Presidenta de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

